

<http://dx.doi.org/10.18232/20073496.1643>

Artículos

El rodrigazo en Argentina: la antesala del golpe militar

Rodrigazo in Argentina: A prelude to the military coup

Norma Silvana Lanciotti^{1, 3} *  0000-0002-0185-3166Martín Schorr^{2, 3}  0000-0002-2403-5449¹ Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina.² Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina.* Correspondencia: nlanciot@unr.edu.ar

Resumen. El artículo propone una interpretación del rodrigazo (junio de 1975) como un acontecimiento disruptivo que funcionó como el escenario propicio para una transformación estructural del capitalismo argentino durante la última dictadura militar. El análisis integra el examen de los problemas económicos estructurales y de la coyuntura con el abordaje de los discursos de algunas corporaciones empresarias en ese periodo. Este plan de ajuste aplicado en el tercer gobierno peronista (1973-1976) actuó como un momento bisagra que permitió al poder económico desplazar el proyecto industrialista y comenzar a construir un nuevo orden económico y social basado en la valorización financiera, la reprimarización de la economía y el disciplinamiento de la clase trabajadora y los sectores populares.

Palabras clave: rodrigazo; industrialización; corporaciones empresarias; dictadura militar.

Abstract. This article proposes an analysis of the rodrigazo plan, introduced in June 1975, as a disruptive event that set the stage for a structural transformation of Argentine capitalism during the last military dictatorship. The analysis includes an overview of Argentina's structural economic problems and the current

CÓMO CITAR: Lanciotti, N. S. y Schorr, M. (2026). El rodrigazo en Argentina: la antesala del golpe militar. *América Latina en la Historia Económica*, 33(3), e1643. <https://doi.org/10.18232/20073496.1643>



Esta obra está protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional

situation, along with an analysis of the discourse of some business associations during that period. The austerity plan implemented during the third Peronist administration (1973-1976) served as a turning point that allowed economic elites to sideline the industrialization project and begin building a new economic and social order based on financial valorization, the reprimarization of the economy, and the social discipline of the working class and popular sectors.

Key words: rodrigazo; industrialization; business associations; military dictatorship.

JEL: N16; N66.

Recibido: 30 de marzo de 2026.

Aceptado: 5 de junio de 2026.

Publicado: 14 de agosto de 2026.

Agradecimiento: Se agradecen los comentarios realizados por dos evaluadores anónimos del trabajo, a quienes se exime de los errores y las omisiones que pudiera contener el texto.

Las crisis económicas no producen por sí mismas acontecimientos fundamentales, sino que sólo pueden crear un terreno más favorable a la difusión de ciertas maneras de pensar, de plantear y de resolver las cuestiones que hacen a todo el desarrollo ulterior de la vida estatal.

— Gramsci (1997)

INTRODUCCIÓN

A mediados de la década de 1970 finalizó en la Argentina el modelo de industrialización que, con diferentes fases, había estado vigente por alrededor de medio siglo. Ese esquema fue sucedido por uno nuevo anclado, en lo sustantivo, en torno al negocio financiero y a las producciones primarias de exportación. Ello, al calor de una redefinición de la inserción de Argentina en la división internacional de trabajo y de los cambios profundos que experimentó el capitalismo a escala global. Lecturas posteriores polemizaron en torno a si dicha transformación era la deriva lógica de un modelo que estaba agotado o si se trató de una interrupción provocada fundamentalmente por una intervención estatal decidida, que procuró sentar las bases de un cambio estructural de la economía que resultara funcional a otro objetivo estratégico: modificar, también de cuajo y de manera irreversible, la correlación de fuerzas sociales.¹

¹ El enfoque liberal (De Pablo, 1980) adujo que el agotamiento del modelo de industrialización precedió a la implementación del programa económico de la dictadura. Otros estudios señalan lo contrario, entre ellos, Azpiasu y Nochteff (1995), Canitrot (1980), Kosacoff, (1984) y Müller (2001). Para una sistematización sobre el estado del arte referido a este tema, véase Müller (2001).

Más allá de estas discrepancias, el grueso de los analistas identifica a la última dictadura militar como un momento bisagra entre los dos modelos de acumulación. En esa aproximación, en algunas ocasiones se caracteriza al programa conocido como el rodrigazo como un eslabón del proyecto refundacional con el que los militares y sus bases de sustentación en la sociedad civil usurparon el poder el 24 de marzo de 1976.

La producción académica sobre la etapa de la dictadura es abundante y aborda temáticas de lo más variadas, no así la del rodrigazo, que parece constituir una suerte de área de vacancia en tanto objeto de estudio.² Se trató de un periodo muy breve: la gestión de Celestino Rodrigo al frente del Ministerio de Economía, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, duró menos de dos meses, del 2 de junio al 22 de julio de 1975. Sin embargo, en un momento histórico por demás convulsionado, tanto en el ámbito local como en el internacional, se sucedieron acontecimientos económicos y políticos cuyo análisis arroja numerosos elementos de juicio para interpretar la construcción de un sentido favorable al golpe de Estado entre los sectores empresarios y la transformación estructural que allí se inicia.

Este trabajo constituye una aproximación al rodrigazo como acontecimiento breve y dramático que condensa y acelera las tensiones estructurales de la economía y de la coyuntura política, lo que termina modificando la conciencia social sobre el presente y dispone la construcción de un nuevo sentido en torno a las causas de la crisis económica y social, así como a las vías para su solución.³ Para ello, en las dos primeras secciones se aborda la evolución de la economía argentina y sus problemas estructurales en los años previos al rodrigazo, así como las condiciones de coyuntura que explican su emergencia, con foco en los ejes centrales del plan de ajuste implementado durante el tercer gobierno peronista y sus resultados más salientes en términos socioeconómicos y políticos. A continuación, se analiza el discurso de tres corporaciones empresarias entre 1970 y 1977: la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (en adelante BCBA), la Bolsa de Comercio de Rosario (en adelante BCR), y la Sociedad Rural Argentina (en adelante SRA). El análisis se orienta a identificar los posicionamientos iniciales de las corporaciones sobre las perspectivas de la economía nacional y los cambios introducidos por el gobierno, así como el momento del viraje de las entidades hacia un apoyo explícito a la intervención militar y a la represión, particularmente de la clase trabajadora.

EL CONTEXTO ESTRUCTURAL PREVIO AL RODRIGAZO

El periodo que precedió al rodrigazo, puntualmente la fase 1964-1974, se caracterizó por el afianzamiento del proceso de industrialización en Argentina. En dicha etapa, la economía argentina evidenció un crecimiento sistemático, a diferencia de otros momentos de la industrialización que habían estado signados por cierto estancamiento en el marco de la lógica de funcionamiento *stop*

² Entre los trabajos que analizaron el gobierno peronista de 1973-1976 y el rodrigazo se cuentan los de Di Tella (1983), De Riz (1987), Sidicaro (2010), Horowicz (2015), Restivo y Dellatorre (2005), Rougier y Fiszbein (2006), Marongiu (2006) y Vitto (2023). Frente a la caracterización de que el rodrigazo fue un ajuste técnico derivado de la inconsistencia de la política económica del peronismo (De Pablo, 1980), los autores aludidos coinciden, con énfasis diversos, en que el plan de ajuste representó una ruptura respecto de la política anterior. El intento de imponer un programa derechista sin acuerdo previo con empresarios y trabajadores en un contexto de politización y radicalización de las masas populares terminó por desestabilizar a un gobierno de base sindical y popular (Di Tella, 1983; Riz, 1987; Rougier y Fiszbein, 2006). El rodrigazo evidenció la disputa de distintos peronismos en el seno del gobierno (Horowicz, 2015) a la par que reveló la imposibilidad de imponer por la vía institucional las políticas de ajuste requeridas por el empresariado (Sidicaro, 2010).

³ La noción de acontecimiento proviene del enfoque conceptual y metodológico de Braudel (1953).

and go (véase cuadro 1) (Basualdo, 2006; Braun y Joy, 1981; Brodersohn, 1975). Esa expansión fue liderada, en gran medida, por el sector manufacturero y se asoció a una participación de los trabajadores en el ingreso relativamente elevada (en torno al 40 %, con un pico del orden de 47 % en 1974).

Tabela 1. Argentina. Evolución anual del PBI total, el PBI industrial, el índice de precios al consumidor (IPC), el salario real, la participación asalariada en el ingreso y el peso del PBI industrial en el PBI total, 1964-1976 (porcentajes)

<i>Año</i>	<i>PBI total</i>	<i>PBI industrial</i>	<i>IPC</i>	<i>Salario real</i>	<i>Participación asalariada</i>	<i>PBI industrial/ PBI total</i>
1964	10.1	18.9	18.2	7.2	39.5	31.8
1965	9.1	13.8	28.5	5.5	40.2	33.2
1966	0.6	0.0	31.9	-1.2	41.1	33.2
1967	3.2	5.5	27.3	-0.1	39.8	32.5
1968	4.8	7.9	9.6	2.5	39.1	32.9
1969	9.6	12.3	6.7	4.3	40.5	33.6
1970	5.1	6.5	21.7	-2.1	42.1	33.6
1971	4.7	7.1	39.1	-2.4	40.8	34.7
1972	3.1	5.3	58.5	-7.8	37.9	35.6
1973	3.5	6.4	43.8	13.2	42.5	36.6
1974	5.4	5.9	40.1	18.5	47.3	36.8
1975	-0.6	-2.8	182.8	-16.4	41.2	35.7
1976	-2.0	-4.5	347.5	-33.1	31.2	34.1

Fuentes: elaboración propia con base en Ferreres (2005) y Bolsa de Comercio de Rosario (1970-1977).

Ahora bien, reconocer el dinamismo de la industrialización de Argentina entre los años aludidos no implica asumir que se trató de un proceso virtuoso, carente de limitaciones e insuficiencias. Las evidencias disponibles permiten establecer algunas de las problemáticas estructurales más relevantes: *a*) la presencia decisiva de empresas extranjeras junto a la debilidad y la fragmentación de la burguesía industrial de origen nacional; *b*) la tendencia al predominio de una suerte de proteccionismo frívolo o espurio en lugar del denominado proteccionismo para el aprendizaje, es decir aquel que, a la par que brinda protección temporaria a las industrias promovidas, genera diversas intervenciones estatales selectivas que buscan dinamizar procesos de aprendizaje y convergencia con las mejores prácticas internacionales (Fajnzylber, 1983); *c*) la escasa articulación entre el poder de compra estatal y el desarrollo, y la consolidación de agentes económicos locales; *d*) el rezago, alentado por las propias políticas públicas, de las industrias elaboradoras de maquinarias y equipos, portadoras del progreso técnico; *e*) el predominio de estructuras oligopólicas de mercado, con fuertes barreras al ingreso y protección mediante cuasi reservas de mercado, lideradas mayoritariamente por empresas de capital foráneo, con patrones de consumo imitativos en el ámbito doméstico; *f*) la fragilidad externa del patrón de industrialización, en la medida en que la propia

diversificación de la matriz fabril conllevó considerables coeficientes de importación de productos intermedios y bienes de capital, y g) la acotada articulación del sector manufacturero con la producción primaria.⁴

Durante el tercer gobierno de Juan Perón, iniciado a fines de 1973, muchas de estas problemáticas formaron parte central del diagnóstico trazado sobre la situación existente y de las propuestas de política económica para afrontarlas. A tal efecto, se formuló el pacto social, que se fundó en un ambicioso acuerdo entre clases sociales (empresariado nacional y trabajadores) vía instancias corporativas de representación (la Confederación General Económica y la Confederación General del Trabajo, respectivamente).

Dicho pacto fue la base de lanzamiento del denominado Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (Poder Ejecutivo Nacional, 1973) que buscaba articular una serie de iniciativas tendientes a mejorar la distribución del ingreso, procurar un avance en materia de soberanía nacional, fortalecer al Estado en su papel regulador, empresario y orientador de la economía, y reforzar el proceso de industrialización, intentando afrontar algunas de sus principales limitaciones estructurales.⁵

Entre los objetivos más salientes del plan se destacan, en primer lugar, la búsqueda por dinamizar la demanda interna y aumentar la gravitación de los salarios en el ingreso, para lo cual se dio especial relevancia a la celebración de acuerdos de precios y remuneraciones en negociaciones tripartitas (Estado, empresarios y trabajadores).

En segundo lugar, se planteaba el desafío de avanzar hacia una mayor integración industrial a partir de la promoción estatal a la sustitución de importaciones en sectores considerados estratégicos, en especial aquellos ligados a la elaboración de insumos intermedios de uso difundido bajo control de capitales nacionales.

En tercer lugar, se apostaba a incrementar las exportaciones de productos industriales a instancias de diferentes mecanismos: mejorar la eficiencia productiva de las empresas estatales (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, Fabricaciones Militares, etc.); otorgar franquicias impositivas, créditos subvencionados y tipos de cambio diferenciales a exportadores de bienes no tradicionales; y establecer acuerdos comerciales y de integración regional sobre todo con países del bloque socialista.

En cuarto lugar, el Plan Trienal apostaba a reforzar el papel de las empresas públicas como dinamizadoras de la actividad económica y a delinear un nuevo régimen de tratamiento para la inversión extranjera radicada en Argentina. En cuanto a esto último, cabe resaltar que el esquema definido incluía, entre otras cosas, cláusulas taxativas sobre sectores vedados para el capital foráneo y sobre las inversiones destinadas a la compra de firmas domésticas; ciertas restricciones a la repatriación de capitales y a los niveles posibles de remisión de utilidades (en ambos casos sujetas a la situación de la balanza de pagos argentina); y el estímulo a la utilización de materias primas, bienes de capital y empleo nacionales.⁶

⁴ Desde enfoques diferentes, los límites del modelo sustitutivo fueron abordados por numerosos autores. A modo de ejemplo se remite a Azpiazu y Kosacoff (1989), Ferrer (2004), Katz y Kosacoff (1989) y Schvarzer (1996).

⁵ Basualdo (2006), Braun (1974), Di Tella (1983), Leyba (2003), Rougier y Fiszbein (2006), Testa (1975) y Vitto (2023) analizaron el contenido y las limitaciones del Plan Trienal.

⁶ La Ley 20.557 sobre radicación de capitales extranjeros regulaba, entre otras cosas, el ingreso de inversión directa, los créditos externos y los contratos que implicaban la transferencia de valores al exterior. Poco después se aprobó la Ley 20.575, que disponía la inscripción en un registro oficial de todas las personas o entidades que llevaran a cabo actividades relacionadas con Argentina en representación de intereses extranjeros. Sobre el contenido y los efectos del nuevo marco legal se remite a Sourrouille (1976).

La viabilidad de un planteo de esta naturaleza radicaba, en gran medida, en la capacidad del Estado para llevar adelante una reforma impositiva en un marco de equidad y justicia tributaria y para extraer recursos a los grandes propietarios y exportadores agropecuarios. Para esto último, se priorizaban distintos instrumentos como, entre los más relevantes, el establecimiento de un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, el señalamiento de que las tierras debían cumplir una función social (de allí que las que eran explotadas de modo deficiente quedaban sujetas a la posibilidad de expropiación o a impuestos progresivos), la intervención del Estado como regulador de la comercialización y la protección a los arrendatarios (prórroga de los contratos de arrendamiento, suspensión de desalojos, etc.).

Por elementos de diversa índole, esta apuesta estratégica por darle mayor sustento al proceso de industrialización de Argentina (tanto en términos del sector externo, como en lo que refiere a la densidad del tejido productivo), y de subordinar y relegar estructuralmente a los grandes propietarios de tierras y a los exportadores de materias primas, no pudo prosperar.⁷ Entre esos factores sobresalen algunos de raíz externa, como la crisis internacional que se inicia en 1973, con hondas repercusiones en el país, y otros de naturaleza interna.

Entre estos últimos se destacan la muerte del presidente Perón –quien fuera artífice y garante del pacto social– en julio de 1974 y la asunción de la vicepresidenta Martínez de Perón, lo que produjo la exacerbación de las contradicciones y las disputas facciosas dentro del peronismo. El principal sostén de la Confederación General Económica (en adelante CGE) había sido el propio Perón. Con su fallecimiento, el Plan Trienal fue desmantelado y José Gelbard fue forzado a renunciar para favorecer la implementación de un programa de ajuste. El aumento de la influencia de José López Rega (impulsor de la fuerza represiva paraestatal de ultraderecha denominada Triple A) y el fracaso del plan de austeridad del ministro de Economía Alfredo Gómez Morales abonaron el camino para el lanzamiento del programa ortodoxo de Celestino Rodrigo en junio de 1975.⁸

LA COYUNTURA DEL RODRIGAZO

El análisis del rodrigazo tiene varias aproximaciones posibles. Aquí nos interesa detenernos en tres de ellas. La primera se relaciona con los ejes de la política económica aplicada y sus resultados más salientes. Al respecto, en una dinámica muy influida por la deriva de la crisis internacional en curso (Arceo, 2011), a mediados de 1975 el pacto social mostraba signos claros de debilidad. Esto se reflejaba, entre otros aspectos, en un ritmo inflacionario elevado (tanto en el mercado paralelo o en negro, como en el oficial pese a los acuerdos y los controles de precios en vigor), un déficit fiscal creciente y una situación compleja en la balanza de pagos.

En ese escenario, a comienzos de junio de 1975 se anunció un programa económico estructurado centralmente en torno de un ajuste pronunciado, tendiente a un drástico reordenamiento de precios relativos, y a recomponer el nivel de reservas internacionales y la situación fiscal. De allí que las principales medidas pasaran por un shock devaluatorio (el tipo de cambio comercial se incrementó 160 % y el financiero, 100 %), un aumento considerable de varios precios regulados (tarifas de servicios públicos y combustibles) y la búsqueda por establecer una suerte de techo a las negociaciones paritarias, bien por debajo de la inflación que se proyectaba.

⁷ La principal salvedad, que a la postre se revelaría coyuntural, pasa por la mejora significativa que se verificó en la gravitación de los asalariados en la distribución del ingreso en el bienio 1973-1974 (véase cuadro 1).

⁸ Véase nota 2.

Se puede concluir entonces que, por las vías aludidas, se procuró sentar las bases de una fuerte transferencia de ingresos: desde los trabajadores y amplios sectores de la burguesía (sobre todo la industrial mercado-internista) hacia, fundamentalmente, los grandes capitales ligados al tradicional negocio de exportación. Es decir, una traslación de ingresos diametralmente opuesta a la que se había intentado desplegar con el Plan Trienal. En otras palabras, el rodrigazo puede ser considerado como la expresión de la capacidad de coacción de aquella fracción de la clase dominante que estaba llamada a financiar en gran medida un programa de profundización de la industrialización que, en caso de resultar exitoso, socavaría fuertemente su histórico poderío económico y su centralidad estructural en tanto proveedora principal de divisas para la economía argentina.

Como era previsible, los efectos del plan del ministro Rodrigo no tardaron en aparecer. En 1975 la economía argentina cayó después de una década de crecimiento ininterrumpido (lo mismo sucedió con la industria, cuyo nivel de actividad declinó de manera bastante más acelerada que el PBI total) (véase cuadro 1), la inflación pasó de un promedio anual del 40 % a más del 180 % y los salarios reales se retrajeron alrededor del 16 % (con heterogeneidades según sector de actividad y capacidad de reacción sindical). Al mismo tiempo, la incidencia de los trabajadores en el ingreso se redujo en aproximadamente seis puntos porcentuales.

Todo ello, en un escenario signado por el faltante de productos de todo tipo, la virtual paralización de muchos sectores productivos, el despliegue de estrategias especulativas por parte del empresariado (tanto en el ámbito de la economía real como en la esfera financiera), y la agudización de muchos de los problemas que habían justificado el plan de ajuste instrumentado (inflación, crisis fiscal y externa).

La trayectoria reseñada tuvo hondas repercusiones en términos políticos, lo que nos lleva a la segunda aproximación al rodrigazo.

El ataque a los salarios propiciado por el plan económico generó una respuesta rápida de las bases obreras, en un proceso en el que desempeñaron un papel fundamental las Coordinadoras Interfabriles, de base clasista, combativa y antiburocrática (Brunetto, 2007 y Slatman et al., 2009). Esta movilización desbordó, en los hechos, a la conducción oficial de la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT), que sostenía una postura dialoguista con el gobierno peronista. En efecto, en las llamadas jornadas de junio y julio tuvieron lugar varias movilizaciones de trabajadores de las grandes zonas fabriles, lo que terminó por forzar a la CGT a llamar a un paro general. En parte importante por esta resistencia obrera, en julio de 1975 se produjo una crisis de gabinete que desembocó en la renuncia de Rodrigo y su equipo, lo mismo que de otros funcionarios encumbrados (como López Rega, de Bienestar Social).⁹

Sin lugar a dudas, lo que dejó como balance este periodo tan breve como intenso fue que, aun en una posición de defensiva, la clase trabajadora tenía una ostensible y efectiva capacidad de movilización y de impugnación en el marco de la vigencia del modelo de industrialización.

En esta coyuntura crítica y por demás convulsionada también jugaron fuerte los sectores del capital. Esto se vincula con la creación, en agosto de 1975, de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (en adelante APEGE), integrada por numerosas organizaciones representativas de intereses variados: Sociedad Rural, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires

⁹ Tras la renuncia de Rodrigo se sucederían las brevísimas gestiones de Pedro Bonanni, Antonio Cafiero y Emilio Mondelli.

y La Pampa (CARBAP), Cámara Argentina de Comercio, Unión Comercial Argentina, Cámara de la Construcción, Cámara de Sociedades Anónimas, Asociación de Bancos Argentinos, entre otras (Baudino y Sanz, 2011; Bustingorry, 2007; Sanz, 2010).

Ante la inestabilidad política y económica, sumado al poder de movilización y resistencia de la clase trabajadora, APEGE no buscó establecer canales de negociación, sino profundizar la crisis como una vía para forzar un cambio de modelo. Esto involucró mecanismos económicos de desestabilización (desabastecimiento, especulación y reticencia inversora, etc.), así como una huelga patronal a mediados de febrero de 1976 para exigir un cambio radical en la política económica, el restablecimiento del orden y la seguridad y, en definitiva, el disciplinamiento social (en especial de los trabajadores).

Esto nos lleva a una tercera aproximación posible al rodrigazo como objeto de estudio. Como suele suceder en toda crisis económica (Anderson, 1995), el escenario descrito fue utilizado por ciertos sectores del poder económico para intervenir de modo activo en la construcción de sentido sobre lo que estaba en crisis o agotado (el propio modelo de industrialización) y, por ende, en la necesidad de una transformación estructural en las bases de la acumulación de capital en Argentina. Por la importancia de esta cuestión, en la sección que sigue nos abocamos a analizar distintas fuentes para avalar esta línea argumental.

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ORDEN IDEOLÓGICO: EL DISCURSO DE LAS CORPORACIONES EMPRESARIAS

En esta sección se examinan los posicionamientos discursivos de las corporaciones empresarias sobre las políticas de gobierno y sobre la situación socioeconómica durante buena parte del decenio de 1970. A este fin, utilizamos las herramientas del análisis crítico del discurso en el intento de establecer la ideología, las formas de legitimación y los efectos en la construcción del sentido del discurso de las corporaciones empresarias durante la coyuntura analizada. La propuesta consiste en registrar la terminología utilizada, las estrategias discursivas empleadas para formular interpretaciones de lo social y los efectos de poder de las prácticas discursivas en la sociedad (Fairclough, 1995; Van-Dijk, 1999 y 2005).

El examen se centra en los discursos y los análisis de coyuntura de las bolsas de comercio de Buenos Aires y Rosario y de la SRA registrados en memorias anuales y anales, así como en material de difusión de APEGE.¹⁰

Esta selección se fundamenta en varias razones. En primer lugar, la selección procura registrar la diversidad de discursos corporativos que incidieron en la agenda pública durante la coyuntura analizada. Las entidades seleccionadas representaban intereses empresariales diversos tanto en términos sectoriales como regionales, utilizaban distintas formas de legitimación discursiva, y expresaban posicionamientos divergentes al comienzo del periodo. En segundo lugar, se prioriza la consistencia de la serie documental, por lo cual se decidió no incluir en el análisis a las memorias de la Unión Industrial Argentina (UIA) debido a que esta entidad se fusionó con la CGE en 1974 y luego fue intervenida por el gobierno militar, por lo que no se publicaron memorias de la entidad entre 1975 y 1980.¹¹

¹⁰ Para más detalle, consúltese al final del trabajo la sección correspondiente a las fuentes consultadas.

¹¹ En 1971-1974, la UIA atravesó un proceso de fragmentación vinculado a la posición diferenciada de pequeñas y grandes empresas frente a las políticas de gobierno, lo cual se profundizó con la incorporación de la CGE a la gestión del gobierno de Héctor Cámpora y a su papel protagónico en la constitución del “pacto social” y el “Plan Trienal”

Los posicionamientos de las bolsas de comercio y de la SRA se registran en distintos apartados debido a que, como se señaló, durante la gestión del Ministro Gelbard, el Plan Trienal constituyó una apuesta estratégica orientada a reforzar el proceso de industrialización de Argentina y a relegar y subordinar al sector agroexportador. Esto implicó que la postura de la SRA se manifestara más beligerante, expresando abiertamente un discurso opositor al gobierno peronista electo en 1973. Las bolsas de comercio representaban intereses más diversificados del espacio empresarial, lo que implicó un posicionamiento más ambiguo en cuanto a las políticas económicas hasta 1975, cuando sus posiciones convergieron en la construcción de un nuevo sentido orientado a validar el golpe militar de 1976. Como observó Acuña (1994), la organización y el comportamiento de los capitalistas no sólo depende de los intereses comunes y de las estrategias que fortalecen su autonomía frente a otros sectores y clases sociales, sino también del nivel y el tipo de conflictos en los cuales participan, lo cual puede contribuir a explicar la convergencia de posiciones hacia 1975.

Los posicionamientos de las bolsas de comercio

A comienzos de la década de 1970, la evaluación de la situación en el discurso de la Bolsa de Comercio de Rosario se iniciaba con la identificación de las principales problemáticas en el marco de un diagnóstico de estancamiento económico. Se señalaba el déficit de infraestructura, los bajos índices de productividad y consumo, el debilitamiento de la producción y el excesivo intervencionismo estatal, manifiesto en la legislación impositiva y en la ampliación de las formas de intervención (BCR, 1970).

En 1971, las presiones inflacionarias ocuparon el centro de la caracterización. En dicho marco, comenzaron las observaciones en torno a la ausencia de un plan coherente orientado a impulsar la inversión vía políticas fiscales. En el transcurso de 1972 se acentuó el reclamo por el creciente injerencismo estatal y la carga en el presupuesto nacional que implicaba el sostenimiento de empresas estatales, financiado con una excesiva carga tributaria y la emisión de deuda pública (BCR, 1971, 1972). Observamos que la entidad apela a terminología técnica con la intención de presentar un diagnóstico objetivo (científico) de la realidad de Argentina desde una posición neutral; no obstante, el uso recurrente de ciertos adjetivos y términos como injerencismo connotan una valoración negativa del accionar estatal.

Por su parte, el discurso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires manifestaba un tono más dicotómico y moralizante. Se expresaba la necesidad de desterrar la demagogia y la mentira proponiéndose a sí misma como una voz representativa del interés nacional más que de los intereses sectoriales. En 1971 y 1972 cobró fuerza la idea de que la normalización del país y la institucionalización hacia el encuentro nacional debía abordarse con patriotismo, y se agregaba que había que aceptar la voluntad de las mayorías y exigir de estas el respeto por el derecho de las minorías a partir de un “proyecto nacional serio y responsable que asimile los cambios que el tiempo impone y que conviertan a Argentina en una nación pujante” (BCBA, 1971, p. 20; BCBA, 1972, pp. 24-26).

Respecto del Estado empresario, la BCBA exigía austeridad, eficiencia y mecanismos de control de la gestión. Asimismo rechazaba los “precios políticos” que, en su mirada, perjudicaban a las empresas privadas, poniendo en relación “las experiencias estatizantes” con “la demagogia y el

(Bonasso, 1997). En 1974, las grandes compañías que no aceptaban la fusión de la UIA con la CGE se retiraron para formar otras entidades, desde las que ejercieron la oposición a las políticas del gobierno peronista. Se destaca, en tal sentido, el caso de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines (COPAL) (Sanz y Peloche, 2017).

populismo mal entendido”. La inflación ocupaba un lugar prioritario entre los problemas centrales porque desalienta “el ahorro útil para el desarrollo, distorsiona la orientación de las inversiones y desequilibra la balanza de pagos”, a la par que “agudiza los conflictos sociales al provocar un deterioro de los salarios reales” (BCBA, 1971, pp. 22-23).

Vemos aquí dos facetas del discurso de la BCBA. Por un lado, se interpela a la sociedad, y no exclusivamente a sus representados, desde una perspectiva binaria que opone un *nosotros* (patriotas asociados al interés nacional, con un proyecto serio y responsable), a un *ellos* (partidarios de la demagogia, la mentira y el populismo mal entendido). Por otro lado, hacia los asociados se enfatiza un elemento clave del discurso identitario de las bolsas de comercio: la relación entre las experiencias estatizantes, los precios políticos y la carga tributaria.¹² Estos términos articulan los argumentos que señalan al Estado como responsable del déficit fiscal, la presión impositiva y la inflación.

Por cierto, la inflación no sólo era vista como resultado de la fijación de precios y del excesivo gasto estatal, sino también de la puja distributiva. En sus términos, la rentabilidad no podía “lograrse con aumentos masivos e indiscriminados de precios porque ello trae como consecuencia el deterioro del salario real de los trabajadores. El aumento del salario real no debe lograrse a través de aumentos masivos e indiscriminados de salario, porque ellos provocan aumento de precios” (BCBA, 1971, p. 24). “El modelo de progreso argentino ofrece posibilidades más que atractivas para la actividad privada. Argentina no padece índices alarmantes de infraconsumo, ni situaciones paupérrimas, ni estados demográficos desfavorables. Posee una inmensa riqueza natural” (BCBA, 1971, p. 23).

Se observa aquí una lectura relativamente optimista sobre el posible devenir de la economía argentina, cuyas expectativas de crecimiento económico dependían de políticas públicas que garantizaran adecuados índices de rentabilidad. La objeción se focalizaba en una utilización ineficiente de los recursos en un entorno de inestabilidad política y económica que alentaba una mentalidad de corto plazo y de negocio rápido, desviando el ahorro a negocios no productivos. El ordenamiento para el crecimiento se lograría alentando la inversión productiva (tanto interna como externa) y disminuyendo la presión tributaria, en el marco de un plan económico preciso y coherente que restableciera la confianza para estimular la inversión y la producción, y para contener o eliminar la inflación.

Esta mixtura de discurso moralizante que invoca al patriotismo y a la unidad nacional, y destaca el papel del empresariado en el crecimiento económico, coloca a la BCBA por encima de los intereses sectoriales a modo de árbitro o tutor de la nación. Desde esta posición, la entidad analiza los reclamos sectoriales por la baja de impuestos y el disciplinamiento de precios como parte de una puja distributiva que da cuenta de los aspectos políticos del conflicto social y económico, y del papel del Estado en dicha pugna. En la memoria institucional de 1972 se enfatiza, por ejemplo, el papel de las fuerzas armadas para llevar adelante el proyecto institucionalizador. Al mismo tiempo, se hace referencia al proceso de radicalización de los sectores populares desde fines de los 1960, en especial de la clase trabajadora, para luego enfocarse en quienes “desde la clandestinidad apelan al terrorismo y a la violencia” (BCBA, 1972, p. 24). La incorporación de referencias al aumento de la violencia como factor desestabilizador de la economía y de la institucionalidad buscaba encauzar la responsabilidad de la resolución de los conflictos en el ciclo electoral que se avecinaba, el cual debía desembocar en el reencuentro de todos los argentinos.

¹² Sobre el núcleo ideológico de las corporaciones empresarias argentinas en el largo plazo, véase Schwarzer (1990).

Podemos observar aquí ciertas diferencias entre las formas de legitimación discursiva de las bolsas de comercio. Mientras que la BCR adopta un lenguaje técnico-económico que busca legitimarse como científico y objetivo, la BCBA recurre a un léxico aleccionador y dicotómico en un tono prescriptivo, para erigirse como árbitro de una sociedad dividida. Ambos discursos rechazan la política de masas y promueven la despolitización de la cuestión social mediante estrategias distintas: uno desde la racionalidad técnica, el otro desde la moral patriótica.

En estos posicionamientos se identifica la continuidad del núcleo ideológico de las corporaciones empresariales que históricamente reclamaban por una menor intervención estatal y la baja de impuestos (Lanciotti, 2025; Schvarzer, 1990). Al mismo tiempo, aparecen elementos nuevos en la construcción discursiva: la inflación, el desorden político-social y la violencia como obstáculos para el crecimiento económico y la institucionalización de Argentina.

El énfasis en el orden es más evidente en las memorias de 1973, que contienen varios pasajes referidos a la necesidad de restablecer el orden y la tranquilidad, una responsabilidad que recaía en la clase política. En esta línea, se pueden leer las manifestaciones favorables al discurso de asunción del presidente Perón y su llamado a la colaboración de todo el pueblo argentino en tono moderado y conciliador. La valoración positiva de Perón se contrapone con el fracaso de Cámpora en garantizar el orden, frente a quienes buscan destruir las instituciones republicanas y desoyen el llamado presidencial a la conciliación. El tono neutro del análisis del pacto social denota cierto apoyo condicionado al Estado, llamado a controlar las tendencias inflacionistas mediante la contención del gasto público, mayor eficiencia en la administración pública y la promoción de la producción y las exportaciones.

En 1974, la BCBA y la BCR adoptarían una posición cautelosa pero más crítica. Se lamentaba el fallecimiento de Perón, reiterando la necesidad de colaboración entre todos los argentinos para dejar atrás los antagonismos. Luego de la descripción en detalle del paquete de leyes económicas asociado al Acta de Compromiso Nacional y el Plan Trienal, se cuestionaba la ampliación de funciones del Estado en desmedro de la iniciativa privada. Respecto a la inflación, se señalaban los límites de la estabilización sostenida por el congelamiento de precios y salarios de 1973 y 1974. Más allá de la incidencia de la inflación mundial en los precios de bienes importados, la suba de precios era atribuida principalmente a los aumentos de salarios y tarifas de las empresas públicas. El consiguiente desabastecimiento de bienes y la expansión del mercado negro demostraban el fracaso de la contención artificial de precios para estabilizar la moneda y la sensible pérdida de la rentabilidad empresarial. Los discursos finalizaban con un llamado a la colaboración en defensa de los intereses de toda la nación, frente a las ambiciones de grupos minoritarios (BCR, 1974; BCBA, 1974).

Se observa la reiteración de un elemento persistente en la ideología corporativa, como lo es la responsabilidad asignada al Estado en la determinación de precios y salarios, y su incidencia (negativa) en la puja distributiva, acentuando la dicotomía entre “nosotros” y “ellos”. La ineficiencia estatal es abordada aquí desde una doble perspectiva: una racionalidad técnica que excluye a la política y una racionalidad moral que posiciona a las entidades como pretendidos portavoces de los intereses nacionales.

El cambio de tono en las memorias de la BCR en 1975 es notable. Se abandona la racionalidad técnico-económica como forma de legitimación discursiva hacia la idea de un sentido inevitable: la economía y la sociedad estaban sumidas en una crisis terminal y no había expectativas sobre

la capacidad del Estado para garantizar un orden social y económico con participación empresarial. La aceleración inflacionaria se exponía como disparador de los problemas que la dirigencia empresarial venía señalando:

A partir del segundo trimestre de 1975 se produjo una fuerte aceleración de la tasa inflacionaria, que impactó sensiblemente en el funcionamiento del mercado financiero. La consiguiente expansión de la emisión monetaria fue uno de los intentos para adecuar la cantidad de medios de pago a las nuevas necesidades surgidas por el incremento de los precios...(BCR, 1975, p. 7).

A eso se agregaban los desajustes del presupuesto nacional con su déficit final de 139,192.4 millones de pesos; el alza récord del costo de la vida que ascendió al 335 %; la evolución negativa de los principales sectores que integran el Producto Bruto Interno, y la comprometida incidencia del endeudamiento externo, ante la precaria disponibilidad de reservas monetarias para responder a los compromisos con vencimientos a corto plazo. (BCR, 1975, pp. 8-10) Para explicar esta situación se invoca a la crisis social e institucional, formulada como una crisis moral y social, que justifica la necesaria intervención de las fuerzas armadas, presentadas como baluartes de la moralidad y el patriotismo. Complementariamente, aparece una asociación entre la violencia y la inmoralidad, por un lado, y la indisciplina social y laboral, por otro.

La crisis que nos agobia tiene sus orígenes bien definidos: por un lado, la influencia de los problemas internacionales, con su manifestación en la restricción externa; por el otro, la creciente necesidad de un real ordenamiento interno que, partiendo de una recuperación moral de la vida pública y de muchas expresiones privadas, fortalezca las instituciones. Se hace perentorio crear un clima de trabajo eficiente, con disciplina social, desterrando la violencia y la inmoralidad (BCR, 1975, p. 11).

El discurso desplaza el diagnóstico técnico en favor de la construcción de un enemigo moral. Al etiquetar el conflicto social como indisciplina y violencia, lo despolitiza y lo vuelve inmoral como argumento para eliminarlo. La función de baluarte de las fuerzas armadas implica asignarles la función de policía moral para la construcción de un nuevo orden. Esto prepara el terreno para que la represión sea vista no como violencia, sino como una limpieza necesaria.

Por su parte, en las memorias de la BCBA de 1975 no se encuentra un análisis detallado e integral de la economía argentina. Lo más sustancial se observa en los informes de las Cámaras. Allí, se presenta a la escalada inflacionaria como detonante de una crisis terminal que provocó la descapitalización de los productores de cereales básicos y la caída de los depósitos de ahorro a plazo fijo, lo que restringió el crédito a mediano plazo (BCBA, 1975, Informe de la Cámara Argentina de Compañías Financieras).

El informe de la Cámara de Exportadores de Cereales (integrante de la Bolsa) pone el foco en el régimen de comercio exterior monopolizado por el Estado que limitaba las exportaciones y desaprovechaba la coyuntura de alza de precios de los bienes exportables. Se mencionan allí las pérdidas cuantitativas y cualitativas de granos, la escasez de instalaciones de almacenamiento y la distorsión provocada por la intervención de la Junta Nacional de Granos que lleva al estancamiento de la producción agrícola. Aparece en el discurso la centralidad del sector agroexportador como abastecedor de divisas, sin las cuales, los objetivos de una gradual industrialización y altos índices

de ocupación laboral propuestos por el Plan Trienal no se lograrían. A partir de esto, se critica abiertamente la política del gobierno peronista como no lo habían hecho antes, con una vuelta a los argumentos de la ideología liberal que atribuye el crecimiento económico argentino a la capacidad y la expansión del sector agroexportador.

El sector agroexportador es desalentado por una política que hace del campo el clásico financiador de los déficits presupuestarios a través de abultados gravámenes y precios políticos que las entidades representativas han venido cuestionando sin éxito durante 1975... El mismo y loable celo que ponen las autoridades en afianzar políticas que favorecen y dan aliciente a las exportaciones no tradicionales es imprescindible desplegarlo también respecto a los productores tradicionales (BCBA, 1975, pp. 215-216).

El Estado aparece aquí como un agente parasitario que recurre al sector agropecuario para cubrir sus fallas estructurales, y discrimina deliberadamente al campo mediante la administración de precios y el aumento de las retenciones. La deslegitimación estatal se funda además en la noción de precio político: si un precio es político, es artificial, distorsionante y perjudicial, en contraste con el precio de mercado natural o racional. Los precios no remunerativos habían provocado el estancamiento de los cultivos. Esto, sumado a la depreciación de la moneda por el “emisionismo que origina el alza desordenada de costos y salarios, de los elementos de mecanización e insumos, de los intereses sobre los créditos”, generó la caída de la productividad, agravada por la indisciplina laboral en razón del ausentismo, las huelgas y el trabajo a desgano (BCBA, 1975, pp. 215-216). Aquí, el discurso articula la ineficiencia estatal con la indisciplina laboral y, en contraste, el sector agroexportador se presenta como una víctima histórica de esta situación.

De modo que, en 1975, bajo el sustrato de los efectos socioeconómicos del rodrigazo, el discurso corporativo muestra un punto de inflexión desde una posición cautelosa con expectativas moderadas y cuestionamientos puntuales a las políticas de gobierno, hacia un posicionamiento abiertamente crítico de las políticas públicas, el Estado y la clase trabajadora. La crítica se formula recurriendo a los argumentos clásicos respecto del sector agropecuario como motor de la economía argentina; no obstante, la fundamentación central de la oposición al Estado y a los trabajadores es de orden moral, en tanto los expone como responsables de la corrupción, la ineficiencia y el caos. Esta construcción de sentido deriva en la celebración del golpe militar y del accionar de las fuerzas armadas, llamadas a liderar un cambio que exige sacrificio y responsabilidad.

[...] una Junta Militar que se vio obligada a asumir el poder ante el vacío de autoridad, el desorden y la corrupción reinante en la administración pública. De la lectura de los objetivos básicos dados a conocer en el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional renace la esperanza de que el país vuelva a encauzarse por la senda de la paz y el progreso (BCR 1975, p. 11; BCBA, 1976, p. 10).

El país se hallaba ante la necesidad imperiosa de modificar el rumbo de su política aun a costa de grandes sacrificios de sus habitantes y reclamó tal cambio (BCBA, 1976, p. 11).

La política económica anunciada por José Martínez de Hoz los primeros días de abril de 1976 incorporó muchas de las demandas de estas corporaciones en su núcleo ideológico básico: racionalización del sector público y de las empresas estatales, reducción del gasto público, liberación de

precios y del comercio. Sin embargo, la clave del apoyo a la dictadura refiere a la “instrumentación de políticas tendientes a lograr un grado adecuado de disciplina laboral” que explicaría la disminución de la inflación. El eufemismo de esta formulación se complementa con la idea de que “los logros se han conseguido con base en el esfuerzo general. Cabe reconocer que el salario real ha llegado a los niveles más bajos de los últimos años, y comparado con el vigente en otros países de occidente se observa un serio deterioro de la posición de nuestro país en la materia” (BCBA, 1976, p. 12).

El discurso anual del presidente de la BCBA del año 1976 sintetiza el proceso de construcción de sentido que sirvió de legitimación activa al golpe militar. Allí, se denosta al gobierno previo –asociado al caos y a la corrupción– para presentar como necesaria e inevitable la intervención de las fuerzas armadas. La entidad termina por hacer explícita la defensa abierta de la represión estatal con base en el monopolio en el ejercicio de la fuerza por parte del Estado: “la represión corresponde únicamente al Estado como comunidad organizada que tiene la fuerza necesaria y es su deber monopolizar y aplicar públicamente con responsabilidad y firmeza” (BCBA, 1976, pp. 27-29).¹³

El discurso de la Sociedad Rural Argentina

En los anales de la SRA la evaluación del panorama económico adquiere matices dramáticos desde comienzos de la década de 1970, con un criticismo marcado a las políticas de gobierno en general. En 1972 se hablaba abiertamente de crisis económica, alertando sobre el recrudecimiento de la inflación y la crisis de la balanza de pagos, y la ineficacia de los controles de precios. La explicación de la inflación es unicausal y refiere especialmente a la emisión monetaria con fundamentos de neto corte ortodoxo. También se cuestionaba la política de precios hacia el sector. El segundo eje de la crítica pasaba por el impuesto a la tierra y la posibilidad de que se instrumentara una reforma agraria que acarrearía la expropiación y la subdivisión de grandes explotaciones (SRA, 1972).

Las quejas y los reclamos se profundizaron en 1973, con el señalamiento de un programa opuesto a los intereses del sector agropecuario: una política inflacionaria resultante de la expansión del gasto y de la inversión públicas, y de los aumentos de salarios; combinada con una política estabilizadora con acción rígida sobre precios y salarios que perjudicaba directamente al sector. Se rechazaba cualquier tipo de acción estatal, cuyo poder creciente visualizaban en la obtención de mayores recursos fiscales, en el aumento descontrolado del déficit fiscal, y en el tipo de cambio diferencial para exportaciones agropecuarias e industriales que impedía el desarrollo del sector agropecuario (SRA, 1973).

En 1974, el discurso de la SRA se endureció aún más al incorporar referencias a la violencia “con una intensidad jamás vista, con ataques armados a las fuerzas de seguridad, asesinatos, atentados con bombas, secuestros con exigencias de rescates multimillonarios y delitos de todo orden” (SRA, 1974, p. 9). Se exigía la resolución a breve plazo de esta situación crítica con energía. Más allá del crecimiento económico que atribuían al sector agropecuario, se reiteraban los aspectos negativos ya señalados: precios dirigidos, aumento de impuestos, expansión monetaria. Respecto al pacto social, argumentaban que los “escasos” márgenes de utilidad impedían que los aumentos de salarios fueran absorbidos por las empresas.

¹³ Similares líneas argumentales se pueden encontrar en los posicionamientos que, en esa coyuntura, esgrimieron otros sectores del poder económico nacional y provincial (véanse, respectivamente, Schorr, 2013; Bonafé et al., 2021 y Simonassi, 2007).

Los proyectos del gobierno de aplicar un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, de reintroducir el impuesto a la herencia y de suprimir desgravaciones en el impuesto a las ganancias para el sector agropecuario fueron calificados como “políticas socializantes contrarias a la propiedad privada y a la seguridad jurídica” (SRA, 1974, p. 17). El control de la exportación de cereales a cargo de la Junta Nacional de Granos, la fijación de precios y el aumento de los derechos de exportación se presentaban como actos confiscatorios.

De modo que, aunque las objeciones de la SRA incluyeran su reclamo histórico en torno a política impositiva y de precios, en el marco de la disputa por la redistribución de ingresos, el discurso no se limitaba a esto. Ya en 1974, y a pesar de que la producción de cereales y oleaginosas había alcanzado un máximo histórico, la corporación señalaba la proximidad de una crisis generada por un Estado que amenaza “su base jurídica a través de proyectos que cuestionan el derecho de propiedad” (SRA, 1974, p. 29).

El uso de términos como “ataques armados”, “asesinatos”, “atentados”, “secuestros” y “delitos de todo orden” no sólo describe una situación, sino que construye un estado de excepción. Al calificar la violencia con una “intensidad jamás vista” se busca instalar la idea de que el sistema institucional vigente ha colapsado. La SRA opera como un factor de presión que busca deslegitimar al gobierno denunciando el caos. Al mismo tiempo, al interpretar la política fiscal como un ataque al derecho de propiedad, la entidad transforma una medida coyuntural en un intento del gobierno por destruir la base del sistema capitalista.

En 1975, cuando Gelbard ya había sido reemplazado por Gómez Morales, a quien valoraban en su intento de corregir los vicios de su predecesor, la SRA comenzó a denunciar a los elementos externos como causantes de la crisis profunda del país, en especial “las organizaciones subversivas que tienen participación en conflictos aparentemente laborales” (SRA, 1975, p. 10). Como se mencionó, la asociación entre trabajadores y subversión-terrorismo, y la exigencia de que el Estado ejerza el monopolio de la violencia, aparece en forma recurrente en el discurso empresarial en 1975. En esta línea se puede interpretar la valoración positiva de la SRA sobre el gobierno de Martínez de Perón en comparación con las gestiones anteriores, porque enfrentaba a los grupos violentos mediante la persecución de la guerrilla. También en esta línea se explica su valoración del plan económico de Rodrigo, como un intento de superar la crisis de balanza de pagos y cuyo fracaso atribuyeron al accionar de la CGT y a su enfrentamiento con el gobierno.

El enfrentamiento obedeció a la negativa de la CGT a aceptar la reducción del salario real prevista en el referido programa económico, como un medio para disminuir las importaciones y acrecentar simultáneamente las exportaciones, para lograr un mayor equilibrio entre los ingresos y egresos de divisas. La oposición sindical a este objetivo se tradujo en una huelga general, paros y demostraciones de fuerza que terminaron finalmente en la obtención de mejoras salariales. . . Es importante señalar que este logro lo obtuvieron los gremios políticamente importantes, porque otros menos representativos quedaron bastante atrás en ese aspecto (SRA, 1976, pp. 9-10).

El fracaso del plan de ajuste de Rodrigo se explica por el enfrentamiento directo de los sindicatos con el gobierno. Esto aparece en la caracterización que hace la SRA sobre la crisis terminal de 1975 como responsabilidad de las políticas internas y de la pasividad de las autoridades ante la beligerancia de la clase trabajadora, representada por la CGT. La distinción entre gremios políticamente importantes y otros menos representativos tiene la intención de deslegitimar a toda

la estructura sindical. La calificación del accionar de los trabajadores como violento, mediante la utilización de términos como enfrentamiento o demostraciones de fuerza, presentaba a la protesta social como una extorsión al programa económico.

El rodrigazo representó la caída final de un esquema de gobernabilidad que buscaba articular las demandas corporativas al interior del Estado (Sidicaro, 2010). La respuesta de la clase trabajadora, que llamó a la movilización y forzó a la CGT a realizar una huelga general en contra de un gobierno peronista, impulsó la reacción paralela del empresariado que se había nucleado en la APEGE. La SRA tuvo un papel clave en la conformación y la fijación de la línea ideológica de dicha entidad, así como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), gremial empresaria creada en 1974 que aglutinaba a las grandes empresas productoras de alimentos. Como se señaló, APEGE no buscó negociar sino profundizar la crisis social y económica mediante diversos mecanismos de desestabilización, entre ellos, la organización de un paro empresario que tuvo un respaldo muy amplio y un eco extensivo en la prensa de la época.

En las solicitadas de APEGE en la previa del *lock out* se formulaba como causantes de la crisis y la destrucción de la empresa privada al intervencionismo estatal, la reforma impositiva, el avance sindical y la hiperinflación. No hay referencias al gobierno más que como sinónimo de desgobierno y caos. En esta construcción de sentido, el Estado debía ser refundado para asegurar la ley y el respeto por la propiedad privada y por “las fuentes de producción en su jerarquía creadora de bienes, fuentes de trabajo y servicios” (La Nación, 1976.)

Las ideas de la SRA, cristalizadas en muchas de las intervenciones de APEGE, se desarrollaron claramente en 1976 cuando desde una lectura retrospectiva se describía al periodo previo como la “más grande convulsión social, política y económica, desde la época de la organización nacional” (SRA, 1976, p. 9). La responsabilidad atribuida al régimen demagógico y populista había abonado un nuevo paradigma cuyo fundamento era moral, dando lugar al discurso con el cual la dictadura militar gobernó en los años siguientes. La memoria de la SRA de 1976 también responsabilizaba a la CGT por enfrentarse al gobierno cuando Rodrigo lanzó su plan económico. En definitiva, sindicatos y gobierno generaron una situación de incertidumbre política y una escalada inflacionaria derivada de las devaluaciones y de los incrementos salariales y de tarifas públicas, que el rodrigazo no pudo resolver debido a la oposición sindical.

Se consolida entonces la construcción de un nuevo sentido según el cual los problemas tienen origen en la ausencia de autoridad, elemento esencial para explicar la crisis económica e inflacionaria. En esta línea, se propone una refundación moral para construir un nuevo orden político y social. “Este orden está garantizado por un gobierno que hace el esfuerzo de encauzar al país en la ley, la verdad y la dignidad, y de llevar la economía a la normalidad, con una estrategia oficial de controlar los salarios” (SRA, 1976, p. 11).

A modo de síntesis, el análisis de los discursos de las corporaciones estudiadas pone en evidencia que al comienzo de la década de 1970 había posicionamientos diferentes e interpretaciones fundamentadas desde una racionalidad técnica, sobre la situación socioeconómica argentina. Incluso en 1973 y 1974, cierto sector de la dirigencia empresarial parecía dispuesto a establecer canales de diálogo con el gobierno, entendido como el garante y responsable de administrar la puja distributiva entre trabajadores y capitalistas, así como entre industriales y agroexportadores. Este orden se quebró con el rodrigazo. Si bien las bolsas de comercio no participaron en APEGE, sus discursos viraron hacia el análisis de la crisis como un problema moral, desplazando los argumentos económicos. En ese momento, confluyeron con la SRA, entidad que fue una de las que lideró el arco opositor empresario y cuyos integrantes estarían entre los grandes beneficiarios iniciales de

la política económica implementada a partir del 2 de abril de 1976. En materia de coincidencias básicas, otro aspecto para remarcar se vincula con el fracaso del plan de ajuste de Rodrigo: en la visión de un sector amplio del empresariado, el veto expresado por la clase trabajadora era una manifestación de la incapacidad del Estado para disciplinarla dentro de los parámetros del modelo de industrialización.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se propuso una interpretación del rodrigazo como un acontecimiento disruptivo que disparó la reorientación de los discursos de las corporaciones empresarias orientados a construir un paradigma político e ideológico que fundamentara la necesidad de la interrupción del ciclo democrático en Argentina y la política económica de la dictadura militar.

La construcción discursiva hacia un orden liberal, antiestatista y antiobrero que legitimaba la avanzada de las fuerzas armadas contra la sociedad fue un proceso gradual que comenzó con la imposición de una agenda con foco en los problemas inflacionarios y tributarios sobre la base de un diagnóstico técnico-económico, y terminó en la construcción de un enemigo moral al cual había que desterrar.

La premisa oculta en el discurso empresarial es que el mercado es el único orden natural y que el Estado debe estar a su servicio. Este discurso es uno de los pilares fundamentales de la construcción de la hegemonía neoliberal en Argentina. La BCR, al definir los problemas de Argentina como económicos y no políticos, intentaba deslegitimar cualquier política de protección social o intervencionismo estatal, etiquetándola como ineficiente o poco coherente. Por su parte, el discurso de la BCBA integraba el análisis económico con la evaluación política desde una perspectiva pretendidamente objetiva con matices moralizantes. La SRA manifestó desde el comienzo del decenio de 1970 un discurso confrontativo posicionándose como agente de ruptura más que de negociación.

El análisis del discurso en el periodo considerado muestra que hacia 1975 los discursos técnicos (BCR) y morales (BCBA) se volvieron más homogéneos y convergieron en la valoración del Estado y de los trabajadores (antes interlocutores), como enemigos. La disparada inflacionaria de la primera mitad de los años 1970 abrió la oportunidad para que estas críticas al Estado y la defensa de una economía de mercado comenzaran a perfilar un nuevo discurso y derivaran hacia posiciones hegemónicas.

Al calor del proceso de industrialización, los países latinoamericanos, particularmente Argentina, habían desarrollado capacidades estatales orientadas a promover el desarrollo de base fabril. En este proceso, en distintos momentos, las corporaciones industriales y las centrales obreras tuvieron un papel central en la definición de políticas de Estado. Por caso, mediante la realización de alianzas y la participación directa en la esfera estatal, así como también desde espacios de oposición vía la movilización y el veto a políticas económicas desfavorables a sus intereses.

En el caso argentino, entre 1970 y 1975 el sector empresario participó activamente en la definición de las políticas públicas por ambas vías (alianza y veto). El triunfo del peronismo abrió la puerta al pacto social que implicó la participación directa de un sector del empresariado representado por la CGE y de los trabajadores a instancias de la CGT. Este pacto constituyó la base para intentar reorganizar la economía en función de un proyecto de desarrollo económico organizado alrededor de la industria (Plan Trienal).

En la esfera empresarial, el sector más afectado fue el agroexportador, en tanto el proyecto implicaba la transferencia de ingresos desde este segmento del capital (sobre todo aquel más concentrado) hacia industriales y trabajadores mediante, entre otros mecanismos, la fijación de precios, el control estatal del comercio exterior, la gestión del tipo de cambio, el aumento de retenciones al agroexportador y el establecimiento de un impuesto a la renta normal potencial de la tierra. De allí que no llame la atención que la SRA se constituyera desde el comienzo en el principal opositor al gobierno peronista con un discurso particularmente beligerante.

El pacto social implicó una corporativización del aparato estatal, no exenta de tensiones, las que estallaron a partir de la muerte del garante en última instancia: el propio Perón. La caída del acuerdo tripartito dejó al gobierno debilitado en una coyuntura de aceleración de las tensiones en varios frentes. Esta situación es explicitada en los discursos de las corporaciones desde fines de 1974 y especialmente en 1975.

El lanzamiento del plan de Rodrigo constituyó un intento de generar por la vía de un shock, una estructura de precios relativos a favor de los grandes exportadores y perjudicial para los trabajadores y el sector industrial mercado-internista. El veto al programa de ajuste impuesto por la clase trabajadora develó a los ojos de las corporaciones empresariales la incapacidad del Estado para disciplinarla sobre el trasfondo de una economía motorizada por la producción manufacturera. Este clivaje determinó un cambio radical en las expectativas empresarias acerca de la posibilidad de orientar la puja distributiva a su favor e impulsó la constitución de APEGE, con el objetivo de contribuir a la desestabilización del sistema para inaugurar un nuevo régimen favorable a sus intereses económicos, pero que garantizara el disciplinamiento estructural de la clase trabajadora.

El rodrigazo terminó por intensificar el conflicto entre los sindicatos y las corporaciones empresarias y habilitó la confluencia entre los discursos antiestatistas, antiobreros y restauradores del orden, que antes circulaban en forma fragmentaria. La preparación del terreno narrativo para la interrupción del ciclo democrático por parte de los militares, integró elementos históricos de la ideología empresarial argentina, con argumentos contruidos desde la racionalidad técnico-económica y una retórica moralizante asociada al patriotismo y al ser nacional. De este modo, se crearon las condiciones de posibilidad para el quiebre institucional. El proceso analizado fue clave para la validación de las políticas de cambio estructural y del disciplinamiento social que la dictadura militar llevaría adelante como parte nodal de su estrategia refundacional de Argentina.

LISTA DE REFERENCIAS

- Acuña, C. (1994). El análisis de la burguesía como actor político. *Realidad Económica*, 128, 45–77.
- Anderson, P. (1995). Balance del neoliberalismo: Lecciones para la izquierda. *El Rodaballo*, 3, 8–13.
- Arceo, E. (2011). *El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones en la economía mundial*. Cara o Ceca.
- Azpiazú, D. y Kosacoff, B. (1989). *La industria argentina: desarrollo y cambios estructurales*. Centro Editorial de América Latina.
- Azpiazú, D. y Nochteff, H. (1995). *El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadurismo y elite económica en la Argentina. Ensayos de economía política*. FLACSO; Tesis Norma.
- Basualdo, E. M. (2006). *Estudios de historia económica Argentina: desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Siglo Veintiuno.

- Baudino, V. y Sanz, G. (2011). *Las corporaciones agrarias e industriales frente al golpe del '76: Apuntes para la reconstrucción de la Fuerza Social Contrarrevolucionaria*. Instituto de Investigaciones Gino Germani. <http://hdl.handle.net/11336/188566>
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1970). *Memoria 1970*. Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1971). *Memoria 1971*. Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1972). *Memoria 1972*. Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1973). *Memoria 1973*. Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1974). *Memoria 1974*. Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1975). *Memoria 1975*. Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1976). *Memoria 1976*. Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1977). *Memoria 1977*. Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
- Bolsa de Comercio de Rosario (1970). *Memoria y balance 1970*. Amalevi.
- Bolsa de Comercio de Rosario (1971). *Memoria y balance 1971*. Molachino Establecimiento Gráfico.
- Bolsa de Comercio de Rosario (1972). *Memoria y balance 1972*. Molachino SA.
- Bolsa de Comercio de Rosario (1973). *Memoria y balance 1973*. Molachino SA.
- Bolsa de Comercio de Rosario (1974). *Memoria y balance 1974*. Molachino SA.
- Bolsa de Comercio de Rosario (1975). *Memoria y balance 1975*. Molachino SA.
- Bolsa de Comercio de Rosario (1976). *Memoria y balance 1976*. Molachino SA.
- Bolsa de Comercio de Rosario (1977). *Memoria y balance 1977*. Molachino SA.
- Bonafé, L., Giraudo, M. y Tejeda, M. (2021). Industriales cordobeses y dictadura (1976-1983). En A. Solís (ed.), *Palimpsesto. Militancias, dictaduras y derechos humanos* (pp. 97-118). Universidad Nacional de Córdoba.
- Bonasso, M. (1997). *El presidente que no fue: los archivos ocultos del peronismo*. Planeta.
- Braudel, F. (1953). *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*. Fondo de Cultura Económica.
- Braun, O. (1974). *El plan económico del gobierno popular*. El Coloquio.
- Braun, O. y Joy, L. (1981). Un modelo de estancamiento económico. Estudio de caso sobre la economía argentina. *Desarrollo Económico*, 20(80), 585-604. <https://doi.org/10.2307/3466720>
- Brodersohn, M. (1975). *Conflictos entre los objetivos de política económica de corto plazo de la economía argentina*. Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política.
- Brunetto, L. (2007). *14250 o paro nacional. Bases obreras, direcciones sindicales y peronismo en la crisis del rodrigazo: junio y julio de 1975*. Estación Finlandia.
- Bustingorry, H. (2007). Historia de APEGE. La huelga patronal del 16 de febrero de 1976. *IX Jornadas Interescuelas*.
- Canitrot, A. (1980). La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del Gobierno Argentino desde 1976. *Desarrollo Económico*, 19(76), 453-475. <https://doi.org/10.2307/3466561>
- De Pablo, J. C. (1980). *Economía política del peronismo*. El Cid Editor.
- Di Tella, G. (1983). *Perón-Perón, 1973-1976*. Sudamericana.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fajnzylber, F. (1983). *La industrialización trunca de América Latina*. Nueva Imagen.
- Ferrer, A. (2004). *La economía argentina: desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI*. Fondo de Cultura Económica.
- Ferreres, O. (2005). *Dos siglos de economía argentina, 1810-2004*. El Ateneo.

- Gramsci, A. (1997). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Nueva Visión.
- Horowicz, A. (2015). *Los cuatro peronismos*. Edhasa.
- Katz, J. M. y Kosacoff, B. (1989). *El proceso de industrialización en la Argentina: Evolución, retroceso y prospectiva*. Centro Editorial de América Latina.
- Kosacoff, B. (1984). *El proceso de industrialización en la Argentina en el periodo 1976-1983* (Documento de trabajo núm. 13). Naciones Unidas; CEPAL.
- La Nación (1976). *Solicitadas de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias—APEGE* (enero-marzo 1976).
- Lanciotti, N. (2025). Políticas económicas, puerto y cuestión fiscal. Los posicionamientos de la Bolsa de Comercio de Rosario frente al Estado, 1930-1955. *Anuario Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo*. XXIX Jornadas de Historia Económica.
- Leyba, C. (2003). *Economía y política en el tercer gobierno de Perón*. Biblos.
- Marongiu, F. (2006). *Políticas de shock en la agonía del estado peronista: el Rodrigazo y el Mondelliaz*. University Library of Munich. Munich Personal RePEc Archive (6338). <https://ideas.repec.org/p/pramprapa/6338.html>
- Müller, A. (2001). Un quiebre olvidado: la política económica de Martínez de Hoz. *Ciclos*, 21, 11–33.
- Poder Ejecutivo Nacional (1973). *Plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, 1974-1977*. República Argentina.
- Restivo, N. y Dellatorre, R. (2005). *El rodrigazo, 30 años después. Un ajuste que cambió al país*. Capital Intelectual.
- Riz, L. de (1987). *Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista*. Hyspamérica.
- Rougier, M. y Fiszbein, M. (2006). *La frustración de un proyecto económico: el gobierno peronista de 1973-1976*. Manantial.
- Sanz, G. (2010). El huevo de la serpiente. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias y el golpe de Estado de 1976. *Realidad Económica*, 251, 7–28.
- Sanz, G. y Peloeche, N. (2017). *La crisis de la UIA y el surgimiento de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines (COPAL), 1972-1976*. XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia.
- Schorr, M. (2013). El poder económico industrial como promotor y beneficiario del proyecto refundacional de la Argentina (1976-1983). En H. Verbitsky y J. P. Bohoslavsky (eds.), *Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura* (pp. 275–298). Siglo Veintiuno.
- Schvarzer, J. (1990). *Estructura y comportamiento de las grandes corporaciones empresarias argentinas (1955-1983). Un estudio “desde adentro” para explorar su relación con el sistema político*. Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración.
- Schvarzer, J. (1996). *La industria que supimos conseguir: Una historia político-social de la industria argentina*. Planeta Argentina.
- Sidicaro, R. (2010). *Los tres peronismos: Estado y poder económico; 1946-1955, 1973-1976, 1989-1999*. Siglo XXI Editores.
- Simonassi, S. (2007). “A trabajar y muzzarella”. Prácticas y políticas de disciplinamiento laboral en la industria metalúrgica de Rosario, 1974-1983. *Historia Regional*, 25, 57–82.
- Slatman, M., Rodríguez, F. y Lascano, N. (2009). Las Coordinadoras Interfabriles de Capital y Gran Buenos Aires (1975-1976): Un estado del arte. *Theomai*, 19, 1–11.
- Sociedad Rural Argentina (1972). *Memoria de la Sociedad Rural Argentina. 1971-1972*. Sociedad Rural Argentina.

- Sociedad Rural Argentina (1973). Anales de la *Sociedad Rural Argentina*. 1973. Sociedad Rural Argentina.
- Sociedad Rural Argentina (1974). Anales de la *Sociedad Rural Argentina*. 1974. Sociedad Rural Argentina.
- Sociedad Rural Argentina (1975). Anales de la *Sociedad Rural Argentina*. 1975. Sociedad Rural Argentina.
- Sociedad Rural Argentina (1976). Anales de la *Sociedad Rural Argentina*. 1976. Sociedad Rural Argentina.
- Sourrouille, J. V. (1976). *El impacto de las empresas transnacionales sobre el empleo y los ingresos: el caso de Argentina*. Organización Internacional del Trabajo.
- Testa, V. (1975). *Aspectos económicos de la coyuntura actual (1973-1975)*. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales.
- Van-Dijk, T. (1999). El análisis crítico del discurso: Perspectivas y teorías. *Anthropos*, 186, 23–36.
- Van-Dijk, T. (2005). Ideología y análisis del discurso. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 10(29), 9–36.
- Vitto, C. (2023). *La política económica del tercer gobierno peronista (1973-1976) y el accionar de las entidades gremiales empresarias* [Tesis de doctorado]. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.